

Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos quinto a séptimo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

1.- Que consta de los antecedentes que las recurrentes ingresaron al país por un paso fronterizo no habilitado, en las cercanías de Colchane. De acuerdo a lo que dispone la Ley N° 21.325 fueron reconducidos por la Policía de Investigaciones a Bolivia, país por el cual transitaron para ingresar a Chile, nación que no aceptó su reingreso.

2.- Que en razón de lo anterior fueron trasladadas las recurrentes a una residencia sanitaria y transcurrido el plazo de observación, ingresaron al país, donde se encuentran actualmente.

3.- Que de este modo cabe concluir que el obrar de la Policía de Investigaciones ha sido acatando la ley vigente, de modo que ningún reproche merece su actuar, pues su actuar ha sido ajustado a derecho.

4.- Que cabe señalar que en la actualidad no afecta a las recurrentes ninguna orden que restrinja su libertad individual, de manera que no se verifica ninguna de las hipótesis del artículo 21 de la Constitución Política de la República que hacen procedente esta acción de amparo.

5.- Que ante la actual situación de hecho que afecta a las solicitantes, cabe tener presente el principio de reunificación familiar, consagrado en los incisos primero y final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, precepto que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección, en cuanto aparece de los antecedentes que la hija y hermana de las recurrentes vive en el país y detenta



una residencia definitiva, de manera que debe permitirse a las actoras efectuar las solicitudes tendientes a regularizar su situación migratoria en el país.

6.- Que, por lo demás, debe tenerse en vista la circunstancia de que en el presente caso no se advierte ninguna vulneración a los tratados internacionales respectó de los refugiados, puesto que las recurrentes no solicitaron la aplicación de tal estatuto, lo que fue expresamente reconocido por la abogada que concurrió a estrados.

Y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, **se confirma** la sentencia apelada de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 667-2022, **con declaración** que **se acoge** el recurso de amparo solo en cuanto la Administración deberá permitir a las amparadas formalizar las solicitudes de rigor tendientes a la regularización de su situación migratoria.

Se previene que los Ministros Sres. Brito y Llanos fueron también del parecer de confirmar el fallo en alzada, con la declaración antes aludida, teniendo únicamente presente para ello las siguientes consideraciones:

1° Que se encuentra acreditado en la especie que los amparados, reconducidos que fueron por la Policía de Investigaciones a Bolivia, no fueron aceptados por dicha nación, siendo derivados por la Policía de Investigaciones a residencias sanitarias dando cumplimiento al protocolo Covid-19.

2° Que, la norma del artículo 131 inciso segundo de la Ley N° 21.325 – *que dispone la reconducción de los extranjeros que sean sorprendidos por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio-*, debe ser necesariamente interpretada en concordancia con los Tratados Internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.



En este sentido, la Declaración de Cartagena de 1984, recoge las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisando un concepto de refugiado al incluir en él a las personas que han huido de sus países porque, su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; lo que es recogido posteriormente en la Declaración de San José de 1994. Por consiguiente, resultan aplicables en la especie, esta vez como principios propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el de Defensa, Revisión de la Medida y Decisión Judicial Previa, de la No Devolución y No Rechazo en Frontera, haya sido o no reconocida la condición de refugiados, hayan ingresado o no regularmente al territorio nacional, normas del Derecho Internacional reconocidas a partir de la Convención de 1951, y artículo VII del Protocolo de 1967 y que proviene de la condición de aquellos. Esto ha sido reconocido, asimismo, de acuerdo al ius cogens en forma expresa en la Declaración y Plan de acción de México, para fortalecer la protección internacional en favor de las personas en América Latina.

Asimismo, tal ámbito del Derecho Internacional ha sido recogido por la Ley 20.430, sobre Protección de Refugiados, y su Reglamento 837, artículos 1, 6, y 26, y, 1, 32, y 35, respectivamente. Por ello, carece de importancia de hecho y jurídica si el ingreso al territorio nacional se ha efectuado por las personas amparadas de forma regular o irregular, razonando y teniendo en cuenta que la salida del país de origen o del lugar en que tenían residencia ha sido urgente y precaria y a veces el extranjero debió ingresar al país necesariamente en forma irregular.



3° Que a mayor abundamiento, respecto de las amparadas debe tenerse en consideración que las persecuciones políticas y dificultades económicas que padecen en su país de origen, las han llevado no solo a ellas, sino que a un sinnúmero de personas a ingresar irregularmente a diversos Estados *-circunstancias que son de público conocimiento-*, por lo que dichas naciones, han debido autorizar, recientemente, visas temporarias a cientos de ciudadanos extranjeros que han acudido hasta sus respectivas fronteras, de modo tal que de mantenerse la reconducción de un ciudadano extranjero bajo tales circunstancias, implicaría necesariamente *–en este caso particular-* una afectación a su integridad física, psíquica y a su seguridad personal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase

Rol N° 10.876-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y los Abogados Integrantes Sr. Ricardo Abuaud D. y Sra. Pía Tavorari G. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.





En Santiago, a veintiuno de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

